

Observatorio de Seguridad Suramericano

Reporte del 1 al 31 de enero de 2005¹

El Observatorio de Seguridad Suramericano tiene como objetivo hacer un seguimiento y análisis de los hechos políticos, económicos, sociales y militares que tienen impacto en las condiciones de seguridad en el área suramericana y que configuran las agendas interior y regional, con base en la recolección de información de prensa e inteligencia abierta.

Contenido

	Pág.
I. Situación Regional.....	1
II. Situación por Países.....	8
III. Agenda Suramericana.....	38

¹ Elaborado por César Andrés Restrepo, Investigador Área Internacional. Con la colaboración de Ingrid Paola Cruz y Marta Lucia Rodríguez, Asistentes Área internacional.

I. Situación Regional

1. Autonomías territoriales

Durante este periodo la región suramericana asistió a la reactivación de los movimientos autonómicos en las regiones más prosperas de Bolivia y Ecuador. Estos movimientos se dan como resultado de la limitada maniobrabilidad política de los gobiernos que se han visto obligados a transar con grupos de presión específicos, y la desatención de regiones que ven poca reciprocidad del gobierno central frente a su esfuerzo productivo, una oportunidad ideal para reclamar su autonomía.

- La autonomía cruceña

La dimisión forzada del Presidente Sánchez de Losada en octubre de 2003 marcó el inicio de la situación que vive actualmente Bolivia, caracterizado por un bajo control del orden público, una baja maniobrabilidad política del gobierno nacional y la reactivación de movimientos que promueven la autonomía de las regiones más productivas del país.

La designación del vicepresidente Mesa como presidente de la nación, no consiguió devolver la tranquilidad al país. Por el contrario, la falta de una estructura política sólida y una votación que respaldara su mandato, contribuyó a la fragmentación de la sociedad boliviana en grupos de presión que condicionan el apoyo a su gobierno a la aceptación de sus iniciativas particulares.

Para contrarrestar la alteración del orden público y el chantaje político, el Presidente Mesa ha tenido que realizar un referendo para la nacionalización de los hidrocarburos, ha suspendido la erradicación de plantaciones de coca en los parques nacionales ubicados en el departamento de Cochabamba, autorizó la conservación de cerca de 3.000 has de coca excedentaria y aprobó la terminación unilateral de concesiones de servicios públicos.

Estos hechos ocurridos en un lapso de apenas 15 meses, llevaron a los grupos de presión y a la población a ver en la presión política y la alteración del orden público, la vía expedita para el logro de sus exigencias y objetivos.

El caso de la exigencia cruceña sobre el reconocimiento de un estatus de autonomía que le permita decidir sobre la utilización de sus recursos económicos y la decisión de políticas regionales propias, no es ajena a esta dinámica. Tras la promulgación el 30 de diciembre de 2004 de un decreto presidencial que autorizaba el aumento de los combustibles, los grupos políticos del altiplano y las organizaciones sociales de los departamentos productores de hidrocarburos convocaron a la población a una protesta generalizada acompañada de marchas y cortes de carreteras, con el fin de presionar al gobierno para que diera marcha atrás a su decisión y conservar los precios del combustible como antes del decreto.

El corte de carreteras y las marchas masivas generaron un pronunciamiento del gobierno nacional rechazando los desordenes y exigiéndole a quienes participaban en las protestas disolverlas y conservar la calma en cada una de las regiones, un requerimiento que aumentó la tensión y provocó la aparición de exigencias accesorias en cada una de las áreas convulsionadas.

En la ciudad de El Alto, la ciudadanía exigió la terminación unilateral de la concesión del acueducto administrada por la multinacional Eaux Lyonnaises, la cual fue aprobada al segundo día de protestas por temor a un desenlace violento. De igual manera, en la zona de los Yungas los coccaleros aumentaron el corte de carreteras para exigir la aprobación de un pliego de peticiones de 14 puntos, el cual fue atendido por el gobierno cuando amenazaba escalar una confrontación entre transportadores y coccaleros. Mientras tanto el decreto de combustibles seguía vigente y las protestas también.

Mientras que el gobierno se encargaba de estos hechos cercanos a la capital, en el departamento de Santa Cruz se gestaba un gran movimiento de protesta compuesto por transportadores, sindicalistas, empresarios, políticos y las juntas vecinales, que conminaba al gobierno a una derogatoria inmediata de los precios del combustible.

El desarrollo de la protesta en Santa Cruz nunca fue atendidamente directamente por el gobierno, que concentró sus esfuerzos en la protección de infraestructura vital para el país con el despliegue de las Fuerzas Militares y de Policía en el aeropuerto de Viru Viru y la refinería de Palmasola.

Ante la poca comunicación entre las organizaciones cruceñas y el gobierno nacional, y debido a la efectividad de las presiones en el altiplano, las organizaciones sociales, políticas y económicas de Santa Cruz convocaron a un recrudecimiento de las protestas y a la reactivación de su proyecto de autonomía que había empezado a moverse fuertemente desde el referendo del gas. Para los líderes Cruceños no sólo era importante entonces solucionar el problema del combustible, sino consolidar su autonomía para no depender de un gobierno central que no daba soluciones a sus solicitudes y que por el contrario respondía con el despliegue de las fuerzas de seguridad.

Adicionalmente, la autonomía les permitiría recibir una mayor porción de los recursos económicos producidos localmente y separarse del rumbo político que le dan al país los líderes políticos del Altiplano, quienes han obligado al gobierno nacional a incumplir contratos y a aprobar nacionalizaciones que terminaran afectando la inversión extranjera y la productividad de su región.

Tras el llamado a la declaratoria de la autonomía y el pronunciamiento de algunos líderes cruceños sobre la necesidad de ir más allá de la autonomía hacia una separación de Bolivia², el gobierno nacional decide convocar todas las fuerzas políticas bolivianas y al

² En una encuesta realizada por la empresa encuestadora Ipsos Captura en noviembre de 2004 arrojó como resultado frente a la pregunta ¿qué desea para Santa Cruz?, que un 64% de los encuestados deseaba la autonomía y frente a la pregunta ¿está a favor de que Santa Cruz se independice de Bolivia? un 51 % de los encuestados respondió afirmativamente.

cuerpo diplomático para respaldar al gobierno y por ende a la unidad boliviana. Esta difícil situación generó la solidaridad de las fuerzas políticas del altiplano, de las fuerzas de seguridad y el cuerpo diplomático, otorgándole alguna maniobrabilidad política, pero no una oportunidad para resolver la crisis cruceña.

Además del llamado de las fuerzas cruceñas a la autonomía, organizaciones sociales de los departamentos de Tarija -donde están ubicados el 50% de los campos gasíferos- y el Beni se sumaron a la petición de regímenes autónomos, lo que aumentó la dinámica de las protestas en Santa Cruz donde se convocó la elección de un nuevo prefecto y de una asamblea cruceña para gobernar, conformada por congresistas, concejales y alcaldes del departamento, desconociendo los llamados a la unidad en el resto del país.

Dada la designación de nuevas autoridades políticas y la declaración unilateral autonómica en Santa Cruz, el gobierno de Mesa propuso la convocatoria de un referendo para decidir el tema de las autonomías y de paso convocar elecciones populares de prefectos, de carácter inconstitucional, las cuales serían avaladas por el Presidente con el nombramiento de quienes resultaren elegidos.

Este nuevo hecho ocasionó la dimisión del prefecto de Santa Cruz y un llamado a la protesta popular, por parte del líder del Movimiento al Socialismo -MAS- Evo Morales, en contra de las autonomías, ya que estas significarían para los departamentos del altiplano una pérdida estratégica en recursos naturales e ingresos económicos.

Una vez más la falta de legitimidad y control político de la nación puso mucha presión sobre las decisiones del gobierno central. Las demandas de un grupo específico, en este caso de la comunidad de Santa Cruz, lograron la promesa de un referendo que apruebe su autonomía antes de la asamblea constituyente, aumentando su poder negociador para cuando esta se implemente.

El problema del combustible aún no se ha solucionado y nuevas protestas se presentan en las calles bolivianas exigiendo adicionalmente la cancelación del debate de las autonomías por fuera de la constituyente y la cancelación de las elecciones de prefectos.

Por la debilidad política de Mesa, el gobierno cedió a las peticiones de los grupos de presión para conservar alguna maniobrabilidad política. Ante el avance de la polarización del país entre los departamentos productivos y los departamentos del altiplano, y peor aun entre indígenas y mestizos bolivianos, la estabilidad boliviana está lejos de conseguirse, dado que los hechos demuestran que cada vez que exista un descontento de algún grupo específico, su petición se solucionara en las calles.

Sin embargo, la desinstitucionalización no es lo más grave que puede pasar. Hay que esperar cuánto aguantarán las Fuerzas Armadas las tensiones regionales, y cómo reaccionará la comunidad cuando el Estado boliviano deba destinar recursos de inversión al pago de las indemnizaciones por las nacionalizaciones y la terminación unilateral de las concesiones, pagos ineludibles cuyo incumplimiento convertirían al país en un paria de la inversión extranjera.

- Ecuador y la autonomía guayaquileña

El pedido de autonomía de la provincia de Guayas en el Ecuador ha sido tomado por muchos analistas como un incidente en el que el partido de gobierno y el Partido Social Cristiano se han enfrentado por ganar la supremacía política y electoral en el principal puerto de Ecuador. No obstante, los antecedentes y el contexto en el que las discusiones sobre la autonomía se han dado, son elementos muy importantes para entender el resurgimiento de la solicitud de autonomía.

La ciudad de Guayaquil es el principal centro industrial y el puerto más importante del Ecuador. Con una población aproximada de 2.2 millones de habitantes, el gobierno local ha iniciado una campaña por el reconocimiento de su autonomía regional, que le permita un mejor aprovechamiento de los recursos allí producidos dada la poca cobertura en servicios públicos, la falta de cobertura en salud y seguridad social, y la poca inversión en seguridad ciudadana, que le generó a la ciudad gastos adicionales por contratar empresas de seguridad privada para la protección de la infraestructura física de la ciudad y de la ciudadanía.

La reclamación de la autonomía se basa además en la votación del 23 de enero de 2000, en la cual los habitantes de Guayas votaron en un 95% a favor del régimen de autonomía para la región. Resultado que no fue tomado en cuenta por el gobierno central.

Después de cinco años de la votación sobre el régimen de autonomía, el alcalde de Guayaquil realizó una marcha por las principales calles de la ciudad reclamando la aceptación de dicho resultado electoral y la declaración de la autonomía como una medida necesaria para reordenar la administración de la ciudad y poder así responder a los retos de seguridad y desarrollo económico de la región

Los hechos ocurridos en Guayaquil en el último mes han demostrado una desatención particular de las necesidades locales por parte del gobierno nacional. En el caso de esta región que produce recursos importantes para el sostenimiento del gobierno central y la inversión en todo el país, la desatención de la alerta autonomista puede ser una decisión equivocada que altere el orden interno del país, específicamente de la región del Guayas.

2. Tropas Suramericanas en Haití

Las acciones militares en Haití continúan siendo de control y recuperación del orden público. No obstante, el retraso en los planes de desarme de la población civil y de las milicias armadas de oposición hace frecuentes las escaramuzas armadas en las zonas intervenidas por la MINUSTAH. Para principio de año, la unidad combinada de ingenieros compuesta por militares chilenos y ecuatorianos, se ha encargado de la recuperación de vías en el sur de Puerto Príncipe.

Con respecto al contingente desplegado hasta el momento, el representante de la ONU en Haití, el chileno Juan Gabriel Valdés, anunció que solicitará al Consejo de Seguridad 1000 policías internacionales adicionales que completen la misión de paz, con el fin de atender los retos que impone el desarrollo del proceso electoral haitiano. Sin el pedido adicional de

Valdez, para finales de enero se habían desplegado 1700 policías bajo el mando de la Misión.

Hasta el momento han sido desplegados en Haití 3217 militares suramericanos y 51 policías, de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador, Paraguay, Perú y Uruguay. Estas tropas han sido destinadas a las ciudades de Puerto Príncipe, Saint Marc, Gonaives, Cap Haitien, Les Cayes y Jacmel, principalmente.

En lo relativo al desarrollo político de la Misión, la presidencia de Argentina en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas durante este mes, abrió un espacio para el desarrollo de una nueva discusión acerca del futuro de esta. Para ese efecto el canciller argentino, Rafael Bielsa, convocó una sesión especial del Consejo con el fin de discutir una vez más los aspectos financieros administrativos y de políticas de la MINUSTAH.

En este sentido el gobierno chileno y el gobierno brasilero anunciaron que se avecina en sus países un debate parlamentario sobre la permanencia de sus tropas en Haití como consecuencia del escaso apoyo financiero y que existe la posibilidad de que sus parlamentos exijan la retirada de tropas, dado el incumplimiento de los compromisos financieros.

Ante esta posible situación crítica y la proximidad del proceso electoral haitiano, el canciller argentino presentó un "plan integral de ayuda" con el cual pretende dar un nuevo aire a la misión de estabilización. El plan incluye la aprobación de un "plan de ayuda internacional", mediante el fortalecimiento de los aspectos de seguridad y una mayor acción económica, social y humanitaria.

Como resultado de la sesión especial, el Consejo de Seguridad emitió un documento en el cual reitera el apoyo a la presencia del MINUSTAH en Haití durante el tiempo que sea necesario, respalda al gobierno interino en sus esfuerzos por reinstaurar la normalidad en el país. Además, hace un llamado a consolidar los procesos de desarme desmovilización y reintegración de los grupos armados a la sociedad y renueva su compromiso con el mejoramiento de los procesos de desembolso de recursos para hacer viable el despliegue de la MINUSTAH durante el tiempo que sea necesario.

3. Seguridad Hemisférica

- Narcotráfico

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y la Unión Europea (UE) anunciaron una inversión por U\$ 1,6 millones para el Control de precursores químicos en los países andinos.

- Tráfico de Armas

En una operación encubierta de la policía nicaragüense fue desarticulada una red de traficantes de armas que pretendían poner en manos de las Fuerzas Armadas

Revolucionarias de Colombia -FARC- misiles SAM-7 de fabricación rusa, que hacen parte de; completo mercado negro de armas en Centroamérica.

Los misiles SAM-7 son parte del arsenal que fue enviado a Nicaragua para la dotación del régimen sandinista durante la Guerra Fría por la Unión Soviética. Estas armas tienen un rango de ataque de 15.000 pies y son apropiadas para el derribo de aeronaves, especialmente de aviones comerciales.

La operación que se llevó a cabo de manera conjunta entre la fuerza policial nicaragüense y agentes de la DEA, se realizó con agentes especiales que se hicieron pasar como guerrilleros de las FARC y que buscaban información sobre la disponibilidad de misiles tierra aire SAM -7 en el mercado negro de armas nicaragüense. Al momento del contacto, la red de traficantes de armas también se mostró partidaria de comercializar un arsenal de aproximadamente 12 misiles con la red terrorista Al-Qaeda.

Después de la captura de los traficantes y el decomiso de un misil, autoridades estadounidenses hicieron público un reporte de inteligencia que indicaría la existencia de 80 misiles en manos de traficantes relacionados con miembros de las Fuerzas Militares nicaragüenses.

Tras la finalización del conflicto entre Sandinistas y Contras, Nicaragua se vio inundado de un arsenal poderoso bajo poco control, por lo que a través de sus fuerzas de seguridad se trató de reunirlos e inventariarlos con el fin de cumplir con los compromisos internacionales de confianza y seguridad. Estos inventarios fueron entregados a la Organización de Estados Americanos, que recibió el inventario y los seriales del armamento en poder de las Fuerzas de Seguridad. Actualmente Nicaragua cuenta con 2100 misiles inventariados, de los cuales no hace parte el misil incautado.

En noviembre del año 2004, el Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Donald Rumsfeld, visitó Nicaragua y llegó a un acuerdo con el Presidente Bolaños para la destrucción de 1000 de los 2100 misiles SAM inventariados por la OEA.

Tras la aparición de este misil y los ofrecimientos de la red de traficantes de un mayor arsenal, el gobierno estadounidense alertó al presidente nicaragüense sobre fuertes indicios de la existencia de una red en el Ejército que estaría traicionando a su gobierno, con el ocultamiento de misiles no inventariados que estarían siendo comercializados a través de los traficantes.

Ante la gravedad del asunto, la presidencia nicaragüense anunció una investigación exhaustiva que permita identificar la fuente de dicho arsenal y si hacen parte de un lote no contado durante los procesos de desarme y control de armas. Asimismo, si miembros de las Fuerzas Militares están involucrados en el mercado ilegal de estas armas. Al respecto, el subsecretario de Defensa para el Hemisferio Occidental, Róger Pardo Maurer, dijo: "Si esto es lo que parece ser, no sólo queda en entredicho el profesionalismo e integridad de las Fuerzas Armadas nicaragüenses, sino realmente también su sanidad".

Por su parte el Ministro de Defensa nicaragüense, José Adán Guerra, desvirtuó todas las informaciones provenientes de las autoridades estadounidenses y señaló que el arsenal en manos de las Fuerzas Militares esta perfectamente resguardado e inventariado, lo que ha sido verificado por agencias del Gobierno de EE.UU como el Departamento de Defensa, el Departamento de Estado y el Comando Sur.